

Editorial

Crisis y tribulaciones

por Nelson Gustavo Specchia *

YA con el año académico 2011 en sus postrimerías, publicamos este número doble de nuestra revista *Studia Politicæ* 21-22, con un contexto político local, regional y global zarandeado por una crisis de raíz económica que ya afecta de lleno a los planos institucionales. Por estos días, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha debido presentar su renuncia tras perder la mayoría parlamentaria, y se negocia en Italia, la tercera economía del continente, un “gobierno técnico” de transición para aplicar los ajustes estructurales diseñados por los líderes de la Unión Europea, en un intento de salvar la moneda común —y al entero proceso de integración continental con ella— de la voracidad de los mercados financieros. Apenas unas horas antes que Berlusconi, el gobierno socialdemócrata griego del premier Giorgios Papandreu había tenido asimismo que resignar el Ejecutivo, y también allí un gobierno de transición, con el beneplácito del liderazgo europeo, se hacía cargo de aplicar el tremendo ajuste estructural a las cuentas públicas, que han tenido a la economía helena al borde de la quiebra técnica y del default durante la mayor parte del año. En la orilla Sur del Mediterráneo, el asalto final a Sirte y el prendimiento y muerte del coronel Muḥammad el Khaddafi terminó con la guerra en Libia; la OTAN ha asegurado su retirada y se abre un nuevo capítulo —lleno de interrogantes— sobre la continuidad del proceso político en el gran país norafricano. También son interrogantes los que plantea el reciente triunfo electoral de los islamistas moderados de En Nahda en Túnez, el primer país del Magreb en despertar a esa “primavera árabe” a la que aún no se le ven los contor-

* Director de *Studia Politicæ*.

STUDIA POLITICÆ



Número 21 ~ invierno 2010.

Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.

nos, tras el derrocamiento del régimen de Zine el Abidine ben Ali en los primeros días del año, que tuvo un efecto dominó sobre todo el tablero regional. Tampoco están claras las modalidades que asumirá la transición en el vecino Egipto, pero la participación de su diplomacia y sus fuerzas armadas en el intercambio de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes, a cambio de la liberación del soldado Gilad Shalit después de haber estado secuestrado por las guerrillas de Hamas por más de cinco años, demuestra que los egipcios no están dispuestos a resignar su rol de potencia mediadora y generadora de equilibrio en Medio Oriente. Y sería deseable que así fuese, especialmente cuando vuelven a surgir proclamas guerreras, como la que estuvo difundiendo el premier israelí Benjamín Netanyahu, llamando a atacar las instalaciones nucleares iraníes para detener el supuesto desarrollo de la bomba atómica por parte del régimen de los ayatollahs. El presidente de la República Islámica de Irán, Mahmmoud Ahmadinejad, no tardó en responder que cualquier agresión sería respondida con contundencia. El Departamento de Estado norteamericano, y la gestión del presidente Barack Obama, requieren de socios confiables en Oriente Próximo para balancear estas posturas radicales, especialmente cuando los capítulos de las guerras de Irak y de Afganistán están demostrando las complejas dificultades que presentan para cerrarse, mientras —en la faz doméstica— la economía estadounidense sigue soportando porcentajes record de desocupación y los precandidatos republicanos a la presidencia comienzan a tomar posiciones. En el plano de la política nacional, por lo demás, la clara y rotunda victoria obtenida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones generales de octubre, con un 54 por ciento del total de sufragios, así como la lejanía en puntos porcentuales de las demás opciones políticas, configura un nuevo escenario para los años que vienen, con la conformación de un proyecto social mayoritario, la profundización del rumbo político (la Presidenta contará nuevamente con mayoría propia en el Parlamento) y una extensión de la estrategia económica, que le ha permitido mostrar ante la reciente Cumbre del Grupo de los Veinte, en Cannes, unos resultados más que satisfactorios en las respuestas del país a la crisis global. De estos elementos intentaremos dar resumida cuenta en esta introducción, antes de presentar los artículos que integran este número doble.

Al Qaeda, ¿más débil o más fuerte?

Entre los elementos que marcaron esta etapa internacional, sin duda la operación comando que terminó con la vida del líder de la red Al Qaeda, Osama ben Laden, ocupó un lugar destacado. En la medianoche de un domingo de abril, el espectacular anuncio del presidente Barack Obama, de que tras

una larguísima década finalmente habían dado con el enemigo número uno de los Estados Unidos y lo habían ultimado, tenía, al menos, tres destinos: la sociedad civil estadounidense, los seguidores de su propio partido, y el auditorio mundial.

Respecto de la ciudadanía de a pie, el mensaje iba destinado a reencantar la vida política, tan debilitada y azarosa en los últimos meses, detrás de un logro patriótico y nacional: vencimos al gran enemigo, a aquel que osó atacar a Norteamérica por primera vez en su suelo, somos fuertes nuevamente, y nuestro país vuelve a ser un sitio seguro para vivir. Para este primer segmento estuvieron pensadas esas frases de que la captura de Osama ben Laden venía a demostrar que los Estados Unidos siguen siendo capaces de hacer lo que se propongan, y de que la muerte de Osama en una remota barriada de los alrededores de Islamabad era un acto de justicia reparadora para con los muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El segundo colectivo de audiencia escogido por los redactores del mensaje eran los propios seguidores del presidente demócrata. A ellos venía a decirles: “lo hicimos nosotros, Bush no pudo encontrarlo y atraparlo durante dos períodos presidenciales, nosotros lo logramos.” Una de las facetas más problemáticas de la personalidad de Obama, al interior del Partido Demócrata, es su imagen de componedor y legalista, respetuoso de los sistemas de garantías, los cuidados procesales y los derechos humanos. Rasgos que contribuyeron en los considerandos del otorgamiento de ese premio Nobel de la paz, tan cuestionado en estas horas. Ese perfil de “blando” es el más atacado por los halcones de la política americana. Por ello, la ejecución de la operación y la decisión de tirar a matar, habrían tenido que devolverle una imagen de resolución y fortaleza frente a las adversidades. Inclusive algunos titulares de la prensa sostuvieron que ese domingo a la noche Obama “se convirtió en comandante en jefe” del ejército norteamericano. Como si antes no lo hubiera sido de hecho, sino apenas de derecho. Para este auditorio estuvo pensada esa frase donde el presidente destacaba que había sido él, en persona, quien había dado la orden de ataque. Y para el resto del mundo, el discurso quiso transmitir un mensaje simple y fuerte: hemos ganado la guerra contra el terrorismo, y lo hemos hecho con el mínimo costo y sin una sola baja entre nuestros soldados. Y tras esta victoria, no sólo los Estados Unidos, sino el mundo todo, es un lugar más seguro.

El resultado inmediato que el mensaje del presidente norteamericano esperaba lograr era un cerrado y unánime apoyo, tanto interno como internacional. Sin embargo, a estas alturas, es claro que algo salió mal. Algunas centenas de personas se reunieron frente a la Casa Blanca, en Washington, y destaparon botellas de champagne, corearon consignas contra Al Qaeda, y cantaron reiteradamente el himno nacional. Otras docenas se reunieron tam-

bién en el Ground Zero, el espacio neoyorquino que ocuparon en su día las Torres Gemelas que tumbó el atentado planificado por Osama en las cuevas de las montañas de Afganistán. Pero, en realidad, fueron muchas menos de las esperadas. Al día siguiente, se conoció la felicitación expresada por el ex mandatario republicano George W. Bush, el presidente que declaró una ubicua y sui generis guerra contra una entidad sin Estado. También llegaron otros mensajes de congratulación, como el del premier británico, y de algunos líderes cuya supervivencia política mucho depende de Washington. Aunque también aquí fueron muchos menos de los esperados. En lugar de un cerrado apoyo, una serie de preguntas sobre la índole de la intervención militar, la brutalidad del ataque seguido de la muerte de Ben Laden, la violación de la soberanía paquistaní por el ejército de un país aliado, y la falta de pruebas materiales que apoyaran la versión de la Casa Blanca, fueron tomando forma, todavía en la manera de interrogantes. Las ediciones en Internet de los principales medios de prensa norteamericanos fueron cambiando sutilmente con el transcurso de las horas, al igual que otros diarios del mundo. Y esos cuestionamientos, mientras se iban conociendo detalles, reflejaban un aumento del tono crítico. Tres días después de que se difundieran las opiniones críticas de respetables líderes políticos mundiales, de juristas expertos del sistema de Naciones Unidas, y de analistas y columnistas internacionales, hasta la misma cadena televisiva CNN hablaba ya de un “asesinato a sangre fría”. Algo, efectivamente, había salido mal.

Barack Obama tuvo la posibilidad de apresar a Osama ben Laden. El hecho de ultimarle en la residencia amurallada de Abbottabad fue una decisión estratégica. Quizás si hubiese defendido su decisión con detalles y fundamentos, hubiera impedido que las versiones y las interpretaciones ocuparan el escenario, embarrando, desinformando y soltando cabos a cada paso. Pero, en cambio, la información desde Washington intentó relativizar aquella toma de posición entre dos alternativas: detenerlo o matarlo. El presidente, como dijimos arriba, quiso adjudicarse la orden de disparar, pero ante las críticas se cambió la versión: la orden la dio la CIA, y sobre el terreno. Cuando hubo que explicar la muerte del terrorista, se afirmó que había presentado resistencia, pero luego se admitió que Osama estaba desarmado. Se reconoció que su paradero estaba ubicado desde hacía meses, y que la confirmación de su identidad era firme; los comandos de Seal Navy tuvieron inclusive la posibilidad de ensayar con suficiente anticipación la operación; y sin embargo no lograron capturarlo vivo. No hay manera posible de sostener esta versión. A la mañana de un día se afirmaba que Osama había puesto a una esposa como escudo, a la tarde de ese mismo día se decía que la muerte de la mujer había ocurrido cuando se interpuso para salvarlo. Que el cadáver había sido rechazado por Afganistán, que había sido cuidado por los ritos musulmanes para los muertos, pero

que para evitar un santuario de terroristas había sido lanzado al mar. En fin: que tampoco había cadáver para mostrar. Pero se mostrarían las fotos. No, no se mostrarían tampoco las fotos, eran demasiado horribles (el acto de la muerte del terrorista no lo era tanto, las fotos sí). El equipamiento de cada comando Seal Navy incorpora una cámara de video, por lo que toda la operación fue filmada y grabada (y seguida por Obama, Biden, Hillary Clinton y el resto del equipo de seguridad de la Casa Blanca en tiempo real, mientras el jefe de la CIA, Leon Panetta, les iba explicando cada paso), pero tampoco se mostrarían al público esas grabaciones. La identidad de Osama ben Laden se había hecho por reconocimiento facial del cadáver, y un ADN hecho a las apuradas sobre el avión. Tampoco estos análisis se harían públicos. Y eso era todo. Había que confiar en la palabra del presidente estadounidense, sin más pruebas.

En conjunto, tantos cabos sueltos han terminado por quitar legitimidad a la operación militar norteamericana. En lugar de una intervención victoriosa y definitiva para terminar con Al Qaeda, parece encaminarse a ser lo contrario: una excusa para reflotar una organización que estaba en decadencia, con un mártir como guía, y un enemigo contra el que estaría justificado atentar, sin respetar ninguna legalidad internacional, ya que él tampoco la respeta.

Marruecos, el otro Islam

En medio de la tensión europea impulsada por la crisis de las deudas de los países mediterráneos, el Norte de África se siguió moviendo durante todo el segundo semestre de este 2011, y en diversas direcciones. Marruecos votó a principios de julio un plebiscito constitucional, que se presentó como otra respuesta a la “primavera árabe”. La cercanía geográfica entre ambas orillas del Mediterráneo, la tensión social por el movimiento de masas de migrantes desde la paupérrima costa Sur del *mare nostrum* hacia los países desarrollados del Viejo Continente, y el preocupante escenario político de las revoluciones populares que tumban autocracias consolidadas y dejan abiertos los escenarios de futuro, hacen que la agenda del Magreb sea, asimismo, centro de atención de todas las cancillerías europeas, muy especialmente en España, Francia, Alemania e Italia.

La tirantez entre cuidados estratégicos de mediano plazo y urgencias coyunturales entre las dos orillas, se puso de manifiesto en la ausencia de una postura común de los europeos frente a la reforma constitucional marroquí. En Europa no se han puesto de acuerdo todavía si el plan de Mohamed VI es una auténtica reforma aperturista, modernizante y democrática; o si, por

el contrario, se trata de una magistral puesta en escena de *Il Gattopardo* en las arenas del extremo occidental del Magreb, armada para dar la impresión de que todo cambia pero que, en el fondo, intenta que nada se mueva de su sitio.

Cuando la “primavera árabe” tiró sucesivamente a los regímenes autocráticos de Zine el Abidine ben Ali en Túnez, y luego al otrora poderosísimo “rais” egipcio Hosni Mubarak, el riesgo de contagio puso en alerta a las administraciones árabes de toda la región que, en general, se inclinaron por una respuesta que mezclaba unas pocas concesiones con el simultáneo aumento del control y la represión. Y cuando unas semanas más tarde los rebeldes comenzaron la ofensiva contra el coronel Muhammar el Khaddafi en Libia, el monarca marroquí Mohamed VI decidió que era el momento de poner las barbas en remojo, antes que las puebladas populares llegaran al palacio con ánimos de barbero.

En Marruecos las movilizaciones comenzaron el 20 de febrero, y esa fecha es la que da nombre al movimiento —también aquí mayoritariamente juvenil— que sale a las calles de todas las ciudades importantes del reino, domingo a domingo, pidiendo la democratización de una de las últimas monarquías absolutas del mundo. Adaptando la estrategia regional de mezclar concesiones con mayores restricciones, el rey diseñó un plan de modernización por vía de la reforma constitucional.

Hasta ahora, el monarca era considerado “sagrado” en Marruecos, y concentra no sólo la titularidad de la representación del Estado, sino que ejerce efectivamente el gobierno en forma directa. Esto es, un monarca absoluto, por definición técnica. A lo que debe agregarse, por cierto, que es propietario de todas las empresas —productivas y de servicios— que realmente cuentan en la economía marroquí. Quizá la única diferencia con los emiratos árabes patrimonialistas del Golfo Pérsico sea, por una cuestión de proximidad con Europa, que en Marruecos el absolutismo ha conservado cierta liberalidad social (en el trato a las mujeres, por ejemplo), y no ha extremado la violencia represiva (salvo en el caso del conflicto con los bereberes y la irresuelta cuestión del Sahara Occidental).

Mohamed VI, de 47 años y educado en Occidente, parece haber entendido que estas características de su trono ya son inviables, tanto en el contexto global, como en la relación estratégica con la Unión Europea y, muy especialmente, en el entorno alterado de la “primavera árabe”. Decidió entonces reformar la Carta Magna del reino y renunciar al carácter sagrado de su persona. Pero aquí comienza el *gattopardismo*. El análisis de la mecánica de la reforma, como el alcance de su articulado, no permite concluir claramente que el resultado vaya a ser una transición hacia un Estado democrá-

tico y representativo. Todo en esta reforma es híbrido y queda a mitad de camino. Y esto ha llevado a que los jóvenes del Movimiento 20 de Febrero plantearan, inclusive, el boicot al plebiscito.

Lo que vienen pidiendo los jóvenes, junto a sectores muy diversos de la sociedad civil, es un cambio hacia un Estado donde el rey reine pero no gobierne, como en todas las monarquías parlamentarias europeas que quedan. Pero la Constitución puesta a referéndum está muy lejos de ese alcance. Marruecos se define en ella como Estado musulmán, conducido por el Rey (persona, si bien ya no “sagrada”, sí “inviolable”), quien presidirá el Consejo de Ministros, el Consejo Superior de Seguridad, y el Consejo del Poder Judicial. Además, por cierto, el soberano retiene en esta nueva Constitución la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, el núcleo duro del poder sigue girando en torno al monarca. Pero es que, junto a estas atribuciones ya presentes en la Constitución de 1996, a partir de ahora el rey será también “Emir de los Creyentes” (o sea, máxima autoridad religiosa, y jefe del Consejo de los Ulemas). Estos elementos son los que impulsan a los jóvenes rebeldes a rechazar la nueva Carta Magna: Mohamed VI, dicen, ha encontrado en el Islam la herramienta para afianzar el absolutismo de su reinado. Pero el riesgo implícito en esta estrategia es alto: los partidos religiosos, hasta el momento en un segundo plano, pueden cobrar una inesperada relevancia.

En Marruecos la religión es cuestión de Estado: los imanes son empleados públicos y sus sueldos están en la nómina del ministerio de Asuntos Religiosos. El sermón que cada viernes el imán lee en la mezquita se redacta en ese ministerio. En un párrafo de la homilía leída por todos los imanes el viernes anterior al referéndum, se destacaba: “La nueva Constitución tiene grandes ventajas para los musulmanes, que serán guiados por el Emir de los Creyentes; Marruecos será un Estado musulmán, y la protección de la familia y de las costumbres estará garantizada en el marco del Islam”. No suena como una declaración muy alentadora para afianzar una apertura democrática, un gobierno laico, y una transición hacia mayores grados de representatividad política. Habrá que ver, además, si la estrategia de Mohamed VI le ha servido para evitar que los vientos de la “primavera árabe” lleguen a las arenas marroquíes.

Sudán del Sur: un país, una esperanza

Un par de semanas después de que el monarca alauíta pusiera la nueva Constitución a referéndum de los marroquíes, la Asamblea General de las Naciones Unidas admitía, por aclamación, el ingreso de Sudán del Sur a la

organización. El trámite, cargado de simbolismo, completó los procedimientos formales del nacimiento de un nuevo país, el número 193 del mundo, por la única vía que permanece y es admitida en estos días nuestros, tan modernos, racionales y felizmente alejados de bendiciones divinas en los asuntos políticos: la aceptación de los pares.

Estamos convencidos de que las secesiones de partes de unidades territoriales y el advenimiento de nuevos Estados fundados en diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas o de cualquier otro tipo de particularidad cultural, no son buenas noticias. Las pretensiones de formación de países cuyos límites coincidan con los del grupo dominante y excluyan a los demás, son rémoras de los viejos discursos nacionalistas que se fraguaron durante los siglos XVIII y XIX, al calor del nacimiento de los “estados-nación” sobre las ruinas de los proyectos imperiales. Discursos que terminaron eclosionando hacia mediados del siglo XX en la mayor locura genocida y totalitaria conocida por el hombre. El colapso europeo fue la consecuencia del nacionalismo llevado a su extremo, y no terminó con la derrota hitleriana, sino que, por el contrario, permeó toda la guerra fría, el maccarthismo estadounidense, e inclusive las dictaduras latinoamericanas que se extendieron hasta entrados los años ochenta. No son fenómenos de la historia distante, sino un condicionamiento de nuestra contemporaneidad, contra el cual hay que estar muy alerta siempre, apoyando acciones que tiendan a fortalecer sociedades inclusivas e igualitarias, donde a los “otros” —la radical otredad de todos los diferentes— no se los expulse sino se los integre, y los Estados sean ámbitos de realización de los proyectos de vida buena de cada uno, en un entorno de diversidad y tolerancia.

Pero, teniendo lo recién anotado como parámetro general, se impone la pregunta de qué postura asumir frente a dos comunidades que fueron forzadas a vivir dentro de la misma circunscripción, y entre las cuales —por su historia y carácter— la coexistencia sólo se presenta como problema. Un problema que, cuando además se agrega la repartición desigual de materias primas y recursos energéticos, no tarda en derivar en violencia a gran escala. Y éste, pensamos, ha sido el caso de Sudán. Por eso aquellos principios generales pierden capacidad explicativa en este caso, y debe admitirse que la partición del Estado sudanés —el más grande de África— en dos países, ha sido la mejor solución a un viejo y triste problema. Un problema, además, de cuyas causas los sudaneses —tanto los del Norte como los del Sur— no fueron responsables, porque les fue impuesto por agentes externos.

Cuando la potencia colonial británica se retiró en 1956, la ex metrópoli impuso la convivencia en un único Estado de las dos entidades sociales distintas que habían estado bajo su dominio imperial. Las poblaciones nómadas

del desierto de la mitad Norte, trigueños de raíz árabo-egipcia y religión islámica; junto a los pueblos (más de 500 tribus, con unos 100 grupos lingüísticos diferentes) de la mitad Sur, un territorio selvático y tropical, de gentes de piel negra que conserva la fe cristiana desde los bíblicos tiempos de Nubia (evangelizados hacia el año 300 de nuestra era). La forzada convivencia entre esas dos entidades sociales sin prácticamente ningún punto de contacto —salvo la común dependencia del río Nilo— terminó decantando en una sangrienta guerra civil, que estalló apenas los ingleses abandonaron Khartum y no se detuvo hasta el año 2005.

Esa larga guerra dejó más de dos millones de muertos y cerca de cuatro millones de desplazados, según los cálculos de la ONU, y un odio en la sangre que parecía difícil de conjurar alguna vez. Sin embargo, los acontecimientos de estos días parecen contener elementos para la esperanza. Los acuerdos del armisticio de 2005 preveían la convocatoria a un referéndum, para que la población negra del Sur manifestara su voluntad de secesión. El plebiscito, que se llevó a cabo en enero de este año, arrojó más del 99 por ciento de votos por el *sí*. Omar al Bachir, el temible presidente sudanés al que la Corte Penal Internacional tiene pedido de búsqueda y captura por el genocidio perpetrado en Darfur, declaró que respetaría el plebiscito (aunque se reservó la decisión sobre qué hacer con los campos petrolíferos de Abyei y con los rebeldes del Kordofán). Y el nuevo país avanzó hacia su independencia, que declaró formalmente el 9 de julio. En esta sucesión de pasos y de símbolos, sólo faltaba el ingreso a las Naciones Unidas, ese club que, a falta de un gobierno mundial, funciona como la instancia legitimadora del planeta. En un trámite acelerado, el provisional gobierno sursudanés solicitó el sillón número 193 de la organización el lunes 11 de julio, en la primer jornada hábil después de los festejos por el nacimiento; el Consejo de Seguridad recomendó positivamente la admisión el miércoles 13; y de inmediato la Asamblea General aceptó el ingreso del nuevo miembro, denominado República de Sudán del Sur.

Todo lo que ha podido verse y escucharse en las declaraciones de testigos presenciales, en el testimonio de los emigrados que volvían a Juba para unirse a los festejos, en los improvisados funcionarios y hasta en los soldados curtidos por tantos años de guerra, era la manifestación de una fiesta social, de una alegría indisimulable, expresada además con esa capacidad musical para los cantos y los bailes grupales tan propia de los africanos. La independencia que festejan no sólo es la que corta los lazos con el Norte, sino también la que termina el proceso colonialista tras el paréntesis de 1956, e inclusive con la opresión que Occidente —Gran Bretaña en este caso— impuso a las tribus de la selva desde la expansión imperial, el expolio de recursos naturales y el drama de la esclavitud. Pero tamaña empresa

está lejos de ser sencilla. Todo está por hacerse, y desde una perspectiva minimalista, los detalles ocuparán parte de este tiempo fundacional. Han diseñado una bandera con tres franjas: negra, como la piel de sus gentes; roja, por la sangre derramada por cientos de miles en la larga guerra; y verde, como la selva que los rodea; las tres cruzadas por un triángulo azul, como las vitales aguas que aporta el Nilo; y en el centro del triángulo una estrella, que dibuja la unidad de las tribus que se unen en la nueva república. Tienen un nuevo himno; un nuevo prefijo telefónico; una nueva moneda; nuevos documentos; nuevos nombres para las calles y las plazas. Cuando pasen los festejos y los detalles del parto, habrá, además de éstos, que ocuparse de cuestiones estructurales que hagan sostenible a la nueva entidad política, y esas ya no están tan claras. El nuevo Estado, que se ubicará en los últimos lugares de todas las listas de desarrollo humano, comprende una superficie de 640 mil kilómetros cuadrados (unas cuatro veces Uruguay, por ejemplo), y aloja a unos 9 millones de habitantes. De ellos, desperdigados por esas vastas planicies, más del 90 por ciento sobrevive por debajo de la línea de pobreza, con apenas \$ 2 al día, en promedio. Su índice de mortalidad materna es el peor del mundo, y un niño de cada 10 no alcanza a cumplir el año de vida. Juba, la capital y única ciudad del nuevo país, tiene apenas una docena de calles asfaltadas, no tiene agua corriente ni cloacas, la luz eléctrica se reduce a un número muy limitado de edificios, y las chozas con cabras y vacas ocupan buena parte de los espacios públicos. Y estas condiciones tan precarias coexisten con los pozos de petróleo que alojan más del 75 por ciento de los 500.000 barriles de crudo diario que exportaba el Sudán unificado. Los pozos están en el Sur, pero las refinerías, los oleoductos y los puertos de salida, en el Norte. Ese “otro” país, hermano y enemigo, con el que a partir de ahora comparte la frontera más larga de África. Hará falta mucha imaginación, paciencia y cintura política para construir este camino iniciado con tanta esperanza.

Libia en la primavera árabe

Muhammar el Khaddafi fue destronado, y sufrió el fin de los dictadores. Desde que comenzó el alzamiento popular, en febrero de este año, hemos venido defendiendo la posición de que la sociedad internacional debía involucrarse activamente en el apoyo a los insurgentes, y hacer cuanto estuviera al alcance de los medios de poder y de derecho que hemos llegado a darnos en nuestra generación, para colaborar en la caída del tirano.

Los argumentos de las posiciones que denunciaron el rol de terceros Estados en apoyo de los insurgentes rebeldes y contra el régimen de Muhammar

el Khaddafi, reconocen un tronco común: el sentir anti imperialista. Es una lectura lineal: si está la OTAN, es porque está el capitalismo occidental. Las Naciones Unidas serían sólo la justificación diplomática de la política exterior de la potencia hegemónica, y la OTAN el ropaje adecentado de los marines norteamericanos; en conjunto, serían la nueva expresión del viejo imperialismo. Y por otro lado: Khaddafi habría sido un joven militar que derribó a una monarquía colonial, que abrazó el panarabismo y el socialismo; su “Libro Verde” fue una de las biblias laicas del tercer mundo; fundó la Revolución Jamahiriya (de masas, informal y anti institucional); le plantó cara a Occidente y a las multinacionales; apoyó los movimientos de liberación; y ni siquiera los bombardeos de Ronald Reagan lograron moverle el pulso. Palabras más, palabras menos, y aunque aquí —por motivos didácticos— las presentemos en bruto y sin matices, esas son las consideraciones que llevan a buena parte de los pensadores a censurar la participación internacional en el conflicto social libio.

Aún agregándole todos los matices del caso, esta forma de razonar ya es hoy indefendible, tanto desde la teoría política, de la historia contemporánea, como desde los resultados objetivos de los programas de Khaddafi. Nadie discutiría que la OTAN, en el contexto de un escenario bipolar, fue el brazo armado con que uno de los polos enfrentó —en táctica y en estrategia— al Pacto de Varsovia. Pero el Muro de Berlín cayó hace más de dos décadas; los condicionantes de la guerra fría han desaparecido; y el mundo, en su conjunto, se ha complejizado sobremanera. Seguir aplicando las categorías de análisis que tuvieron vigencia desde la segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética, deja en la boca un regusto a cosa rancia, a no haber advertido que la creciente complejidad también hizo posible que los colectivos sociales tomaran contacto con esas “otredades”, esas realidades diferentes y lejanas, que antes quedaban enclaustradas dentro del dibujo artificial de las fronteras, y ahora se acercan —a la velocidad de los megabytes de la sociedad de la información— al comedor de cualquier casa. Y que decidan tomar partido por ellas.

Cambio de paradigmas interpretativos que también distorsionan la mirada de los afectos y de las lealtades. Porque muchos de los que reniegan de la intervención de las fuerzas occidentales en el conflicto libio, sienten que el viejo coronel —más allá de sus excentricidades en la ropa, los uniformes entorchados, los lentes de colores y las guardaespaldas vírgenes— fue uno de los últimos luchadores que resistieron el ímpetu homogeneizante e invasor del capitalismo occidental. Incluso esta mirada de antigua progresía, si no fuera porque induce a errores, sería querible y tierna en su visión naïf de la política internacional. Pero el león de Libia no tenía un pelo de su abundante cabellera de revolucionario romántico o ferviente anticapitalista.

Khaddafi ha sido un sanguinario tirano que utilizó el poder para sojuzgar a siete millones de personas durante cuatro décadas, convirtió un Estado (Libia nunca fue una nación) en una satrapía personal y familiar, y con los dividendos de la exportación de hidrocarburos generó una pequeña élite, vinculada directamente a su persona, que abusó de esos recursos de una manera patrimonialista, sin ningún tipo de límites sobre vidas y haciendas de sus congéneres.

Así, desde aquellas lecturas se ha intentado explicar toda la operación internacional en Libia con el argumento del petróleo. La OTAN sería la avanzada de los países occidentales, que van a quedarse con el petróleo del subsuelo de los desiertos de la Tripolitania y la Cirenaica. Hemos argumentado, contra eso, que el petróleo —su búsqueda, extracción, almacenamiento, transporte y exportación— ya estaba en manos de compañías extranjeras antes del levantamiento insurgente. Compañías a las que Khaddafi les aseguraba, con contratos que sólo se aprobaban por su mano, previsibilidad y máxima seguridad. Como sólo una tiranía puede ofrecer a sus socios selectos, y como jamás podrá ofrecer ningún sistema político democrático, cualquiera sea, que surja de la actual revolución libia.

¿Por qué, en todo caso, obviar burdamente otros elementos y razones, que impactan con fuerza en la conciencia colectiva de nuestro tiempo, y que las sociedades civiles toman para presionar a sus respectivos gobiernos? Khaddafi no terminó siendo el heredero de Gamal Abdel Nasser y su socialismo panarabista como pretendía, más que en sus discursos. En la práctica, fue el banquero de más de medio centenar de grupúsculos terroristas en todo el mundo; cuando se le dio por pagar atentados aeronáuticos, tiró un avión cargado de pasajeros sobre Lockerbie, y otro —el vuelo UTA 772— en el Sahara; jugó a la guerra invadiendo Chad, adquiriendo armas de destrucción masiva (ADM), fabricando gas mostaza y atentando contra Faisal en Arabia Saudita, Hassan en Marruecos, y hasta contra Anwar el Sadat en Egipto, “culpable” de la paz con los israelíes; violó cualquier soberanía nacional para asesinar disidentes en el extranjero; puso precio (llegó a pagar hasta un millón de dólares) a las cabezas de sus enemigos huidos de Libia, mientras recibía en sus palacios a los terroristas más renombrados, como Abu Nidal. Y un currículum político tan frondoso y tan impropio de un líder libertario, es aún más vergonzante cuando se intentan reseñar los atropellos contra su propio pueblo. Desde la limpieza étnica de los bereberes; al estado paranoico establecido cuando convirtió a uno de cada cinco libios en informantes del gobierno; al morbo de la sangre cuando dirigía personalmente las ejecuciones de opositores (retransmitidas en directo por la televisión oficial), la amputación de extremidades, las mil y una forma de persecución y acoso a cualquier minoría o disidencia.

Y de pronto, cuando una porción de esa sociedad sojuzgada, jugándose la piel se alza contra el tirano, ¿qué debía hacer la comunidad internacional? ¿Quedarse de brazos cruzados mientras observaba cómo el régimen reprimía a los civiles, amparado en los principios de soberanía nacional y de no injerencia de terceros en los asuntos internos de un país? No. Debía intervenir. Y es deber de un demócrata apoyar esa intervención. El derecho internacional humanitario ha avanzado, junto con los tiempos y las nuevas formas que adopta la estructura política mundial, tanto a nivel institucional como en el plano de la sociedad civil. El principio “responsabilidad de proteger”, uno de los basamentos de la decisión multilateral que dio pie a los bombardeos de la OTAN contra Khaddafi, es un avance en los deberes hacia los más débiles, sin importar dónde vivan.

Los más de cuarenta años de tiranía también vaciaron de instituciones y de instrumentos republicanos a Libia. Por eso la sociedad internacional, a través de las organizaciones multilaterales que ha logrado darse hasta nuestro tiempo, debe permanecer allí, ayudando a la reconstrucción del país. Los libios se merecen una oportunidad de construir una sociedad en libertad; asegurar esa oportunidad no está en sus manos, sino en las nuestras.

Túnez, el suave aterrizaje del Islam

La pequeña república magrebí de Túnez volvió, hacia fin de este año, a ponerse al frente de los procesos de cambio que vienen moviendo las estructuras políticas del Norte de África y de Oriente Medio. En las elecciones convocadas para conformar una asamblea constituyente que provea al Estado, por primera vez desde su independencia de Francia en 1956, de una Constitución democrática, han vencido claramente las corrientes islamistas. El interrogante que abre este resultado es si con él también Túnez viene a marcar una tendencia en el rumbo de la región.

Porque en Túnez comenzó todo, y no porque la acumulación de corruptelas y equívocos que las dictaduras árabes del Magreb —apoyadas sustantivamente por Occidente— hubieran tenido en este pequeño país de la costa sur del Mediterráneo unas condiciones diferenciales. Quizás solamente la gota que rebalsó el vaso de la paciencia cayó en Túnez, y una vez que el derrame se inició ya fue imparable. Esa gota, dolorosa, fue la radical protesta del joven ingeniero informático —y eventual vendedor callejero de frutas— Mohammed Bouazizi, que el 17 de diciembre del año pasado, ante la brutalidad policial que había destrozado el carrito con que intentaba ganarse la vida después de haberlo intentado todo, en un mercado laboral cerrado a cal y canto y en una sociedad sin horizontes de cambio ninguno, se prendió

fuego. Su rebeldía desesperada rebalsó los diques que contenían tantas situaciones similares, en el entorno de un sistema político feudalizado, donde a la “dictadura blanda” de los treinta años de Habib Bourguiba, le había sucedido la dictadura más extrema, familiar y cleptocrática de Zine el Abidine ben Ali y su mujer, Leila Trabelsi. Las masas tomando las calles, románticamente designaron “revolución de los jazmines” a sus protestas, pero la fuerza real que manifestaban empujó a Ben Ali a subirse a un avión (su esposa Leila lo llenó, previsoramente, de una tonelada y media de oro) y partir hacia el exilio en Arabia Saudita. Entonces comenzó el contagio: Egipto, Yemen, Bahrein, los rebeldes de Libia, los opositores monárquicos de Marruecos. Túnez había marcado el comienzo, y nadie está seguro de marcar todavía el final.

En el discurso de auto justificación de los dictadores que la “primavera árabe” está barriendo, siempre ocupó un lugar importante el considerarse a sí mismos como la última barrera frente al fundamentalismo islámico. Había corrupción, apenas unos barnices de democracia y violaciones a los derechos humanos en sus regímenes, pero todo eso era un precio módico que había que pagar para impedir el mayor de todos los males: que los partidos religiosos llegasen al poder, y con ellos la imposición de la “sharia” (la regulación de las conductas sociales mediante los preceptos coránicos) hacia el interior de las sociedades, y la más que probable enemistad con los países occidentales (con la consecuente suspensión de las exportaciones de hidrocarburos hacia ellos) como principal consecuencia externa. El argumento de “freno del islamismo radical” comenzó a debilitarse hace ya tiempo, a medida que se conocían detalles sobre el complejo entramado de agrupaciones en que se dividía el Islam político, que el simplismo intencionado de las dictaduras había intentado meter en la misma bolsa. Y también con el resultado de algunas experiencias de partidos islámicos no radicales en el poder, principalmente con el AKP de Recep Tayyip Erdogan y Abdullah Gull en Turquía. Ahora, en ese universo aparece el islamismo moderado del tunecino En Nahda (El Renacimiento), y arrasa en las elecciones a la convención constituyente, en lo que puede ser una nueva señal del rumbo de los sistemas políticos saneados tras las revueltas de la “primavera árabe”.

Bajo el régimen de Ben Ali, y como parte de aquel discurso de auto justificación, todo lo que oliese a islamismo estaba proscripto y prohibido. Los principales dirigentes de esos sectores, por lo tanto, llevaban décadas en el exilio, y no había ninguna estructura —no sólo ningún partido político, tampoco ninguna organización no gubernamental— sobre la cual apoyarse para plantear una alternativa. O sea que el nombre del partido tunecino hace referencia concreta a un volver a nacer, a un surgimiento desde la nada, tras casi sesenta años de laicismo obligatorio. Sin embargo, en apenas nueve

meses, el movimiento En Nahda ha conseguido estructurar un nuevo discurso, que combina dosis de tradicionalismo con otras de modernidad, y lo ha articulado en una clave de medida —sin convocatorias a revanchismos ni venganzas— que ha dado en la tecla y empujado a un apoyo social mayoritario. Y parece haber otro elemento que da una pauta del nuevo comportamiento del electorado: además de la sorpresa de la clara mayoría de En Nahda, las principales fuerzas de oposición son partidos que no hicieron campaña contra el islamismo. En cambio, la oposición tradicional, que sigue repitiendo el viejo argumento de que no hay islamismo moderado posible, y que hay que parar a los religiosos de cualquier manera, porque detrás de ellos vendrán los barbudos a lo talibán y la imposición de la “sharia”, fueron censurados por el voto popular.

Que un partido que proclama claramente su adscripción islámica haya sido la opción elegida por los sectores progresistas, en detrimento de las fuerzas usuales de la centro izquierda, tiene mucho que ver con las maneras en que En Nahda articuló su discurso, en el espacio de poco más de medio año. El hecho de que haya aceptado sin restricciones la imposición de paridad de género en las listas electorales, las referencias permanentes al “modelo turco”; las posturas conciliadoras con los sectores que estuvieron más cerca del régimen de Ben Ali; la seguridad de que el modelo de desarrollo y de que la economía de mercado no serán cuestionados; y una manifiesta relación de cooperación con Occidente; han terminado por alejar el fantasma de los barbudos a lo talibán, y de convencer a la mayoría de tunecinos que la coexistencia entre régimen democrático y republicano moderno, con preceptos religiosos y usos y costumbres que hacen a su identidad, es factible.

Las elecciones de fines de octubre cierran la “revolución de los jazmines”, y abren una nueva etapa, la de transición hacia un sistema democrático en el marco de un Estado de derecho. Si los islamistas moderados tunecinos consiguen conducir ese tránsito, estaremos ante un fenómeno realmente novedoso de la política internacional, y ante todo un nuevo escenario de posibilidades para Medio Oriente y el Magreb.

En este contexto, por tanto, presentamos las reflexiones y las investigaciones que integran este número doble de *Studia Politicae*. Nuestra revista, además, presenta en esta edición algunas notas a destacar. Entre ellas, la clase magistral del profesor Gianfranco Pasquino titulada *La ciencia política en un mundo en transformación*. La ponencia del catedrático de la Universidad de Bologna que abre nuestro volumen, corresponde a la conferencia que pronunciara con motivo de la recepción del Doctorado Honoris Causa por nuestra Universidad, en el marco del X Congreso Nacional de Ciencia Política, que tuvo en esta edición a la Facultad de Ciencia Política

y Relaciones Internacionales como sede. Precisamente, cerramos el número doble de la revista con las palabras del Rector de la Universidad Católica de Córdoba, Rafael Velasco s.j., al inaugurar las sesiones del Congreso.

A continuación, en *Arenas de Gobernanza, núcleos de poder y redes de influencia socio-política. Estudio de casos de Comunidades Regionales en Córdoba, Argentina*, Víctor Mazzalay analiza los sistemas de decisión colectiva en espacios regionales sub-nacionales, problematizando la conformación de “arenas de gobernanza” desde la perspectiva de las redes de influencia socio-política. Para su estudio, toma los casos de las comunidades regionales de Córdoba, que le permiten visualizar cómo se configuran modos de gobernanza estado-céntricas; se producen incorporaciones de actores no-estatales a las “arenas de gobernanza” de manera informal y periférica; que en esa gobernanza informal los actores de la sociedad civil se vinculan de manera más débil y marginal que aquellos que representan al sector del mercado; que se configuran núcleos de poder relativamente independientes de las estructuras formales de autoridad; así como que la apertura-clausura de las “arenas de gobernanza” no son necesariamente equivalentes a la apertura-clausura de los núcleos de poder que en ellas se forman.

Luego, en *Conflicto cultural y jurídico en la lucha de los pueblos originarios. El caso de la Comunidad Guaraní Estación El Tabacal (Salta, Argentina)*, Andrea Gigena y Griselda Ibaña proponen discutir las estrategias de las que se ha valido el Estado, a través de su sistema de derecho, para reconocer y gestionar la diversidad étnica. Por un lado, un discurso y una política de incorporación tendiente a *homogeneizar* a los individuos bajo la identidad única de la ciudadanía, y por otro una política de reconocimiento de la *heterogeneidad*, pero como mera diversidad. Avanzan en esta discusión a partir de la historia de la Comunidad Indígena Guaraní Estación El Tabacal–La Loma, ubicada en la provincia de Salta, que mantiene desde hace varios años una disputa por la propiedad de su territorio con el ingenio San Martín del Tabacal.

A continuación, Emilio Rufail y Milton Escobar suscriben el artículo *Los procesos de cambio en el mundo árabe*, centrado en la serie de protestas que han movilizado la región de Medio Oriente durante el presente año. Los manifestantes, sostienen, aprovecharon las protestas por alimentos para extender sus reclamos por mayores espacios de participación política y libertad de expresión. Esta situación generó un efecto contagio sobre el resto de los países de la región y una ola de protestas civiles, algunas reprimidas violentamente, en diferentes partes del mundo árabe —Jordania, Yemen, Argelia, Marruecos, Arabia Saudita, los países del Golfo y Siria—

y amenaza ahora con extenderse a otros países islámicos pero no árabes, como Irán.

Por último, cerramos este número con el artículo *Performatividad, perversión y política. Sobre verdad y mentira en Hannah Arendt*, de Emmanuel Biset. El paper analiza un breve escrito de Hannah Arendt de 1967, intentando mostrar el valor jurídico de la razón como delimitación, a la par que indicar el carácter problemático de una noción de límite como frontera irrefragable. Biset divide su artículo en tres partes; en la primera se muestra la compleja relación entre verdad y política; en la segunda se aborda la afinidad esencial entre mentira y política; y termina señalando en qué sentido performatividad y perversión vienen a cuestionar los estrictos límites del discurso arendtiano.

El volumen 22, por su parte, se abre con *Política y religión en una sociedad secular: Perspectivas sobre una tensa relación desde la obra de Moses Mendelssohn*, de Diego Fonti. Fonti sostiene que religión y política parecen ser campos de discursos y acciones que desde la modernidad están tensamente interrelacionados. Para elaborar un análisis fructífero de esta relación recurre metodológicamente a un distanciamiento, en el sentido de analizar a un autor temporalmente ubicado en la modernidad pre-crítica, Moses Mendelssohn, para una posterior resignificación desde nuestro espacio presente. Las nociones de superación de la contingencia, independencia valorativa de juicio de las ciencias, y garantía religiosa de la separación de los campos de interés religioso y científico-político, le permiten a Fonti desarrollar la racionalización y moralización de la religión que se genera desde la modernidad, y desde ellas su rol político. Estos elementos muestran la vitalidad de la propuesta de Mendelssohn para una comprensión todavía significativa de la relación entre política y religión.

Luego, en *Participación ciudadana municipal en Chile: Lecciones de tres estudios de caso*, el equipo conformado por María José Allende, Cecilia Osorio y Fabián Pressacco presenta un estudio exploratorio que busca identificar dimensiones claves que influyen en la aplicación de políticas de participación en la gestión local en Chile. La existencia de un marco legal al respecto contribuye a la institucionalización de estas prácticas, sin embargo existe un bajo nivel de aplicación de instrumentos legales a nivel municipal. Frente a esto, los investigadores de la Universidad Alberto Hurtado, de Santiago de Chile, sugieren que estaría influido por desconocimiento, por la disposición del alcalde frente a este tipo de iniciativas, y por los recursos (técnicos y económicos) disponibles; con lo que ponen en evidencia la necesidad de perfeccionar el marco legal, generar incentivos para su aplica-

ción, proveer los recursos necesarios y fomentar una cultura participativa que trascienda lo ciudadano y se incluya en lo institucional.

A continuación, Julieta Bartoletti firma el artículo *Montoneros: interrogantes abiertos casi veinte años después*, donde propone un estado de la cuestión sobre el tema Montoneros, a partir del análisis en profundidad de un conjunto acotado de autores. El trabajo analiza las diferentes imágenes e interpretaciones generales, para explicitar sus discusiones y acuerdos, y señalar los interrogantes aún abiertos, tanto respecto del tema de los orígenes de la organización, como respecto de la identidad peronista de Montoneros, así como con el denominado proceso de “militarización” que vivió posteriormente el grupo político argentino.

Finalmente, Adolfo Buffa y Corina Echavarría proponen el paper *La “transparencia” presupuestaria a partir de la experiencia de los municipios de la provincia de Córdoba*. Los autores sostienen que cuando se trata de pensar la gestión democrática de los recursos, las propuestas que han hincapié en la transparencia de la gestión del presupuesto se han desarrollado en un contexto de alto endeudamiento público. En este sentido, los modelos desarrollados por los organismos multilaterales de crédito se orientan, principalmente, a aumentar los costos de la corrupción promoviendo las Buenas Prácticas de la Transparencia Fiscal. En el caso particular de Argentina, la transparencia es citada como criterio para el desarrollo de las actividades comunes del sistema de administración financiera, en lo que podríamos denominar como una acción anticipatoria de los debates internacionales. Sin embargo, llamativamente, la referencia a la transparencia desaparece del articulado original de la Ley 24.156/92 y es reinterpretada en las posteriores modificaciones y reglamentaciones, restringiendo su contenido democrático a favor de una reforma eficiente del Estado. En este sentido, los autores se preguntan sobre las relecturas que en términos de gestión democrática se pueden hacer de las mencionadas modificaciones y reglamentaciones. Así, el escrito intenta dilucidar los contenidos, alcances y consecuencias del concepto de transparencia en las finanzas públicas, como un emergente de los lineamientos de política fiscal internacionalmente instalados.